

11 de abril de 2002: Un hito histórico de la fractura social venezolana

Sostengo que el 11 de abril de 2002 es un auténtico parte-aguas de la contemporaneidad venezolana y que de allí en adelante se configura en el país una fractura social de envergadura, cuyo impacto todavía no ha sido debidamente estudiado. Es lo que en la literatura de origen anglosajón se conoce como un *cleavage*, aunque es solo varios años después del 11 de abril de 2002 que esta tesis empieza a encontrar respaldo, aunque ciertamente preliminar, en investigaciones empíricas. Veamos.

La teoría de los cleavages

En la década de los '60 Stein Rokkan y Seymour Martin Lipset, en el marco de una investigación de sociología política comparada, estudiaron afanosamente las estructuras de división de 13 sistemas políticos -12 competitivos y uno que, para la época, había dejado de ser competitivo: España- y su impacto sobre la configuración de los sistemas de partidos y los alineamientos electorales. Se interesaron por la naturaleza de los conflictos que originaron divisiones sociopolíticas en cada uno de estos 13 casos y procuraron distinguir entre los conflictos temporales o secundarios y los obstinados u omnipresentes; entre los que produjeron coincidencias entre aliados y enemigos, y los que, por el contrario, reforzaron las divisiones existentes, o más aún, los que polarizaron a la ciudadanía nacional.

Terminaron prestando atención a los alineamientos basados en criterios socioculturales tales como *región, clase social y credo religioso*, así como a los originados en criterios estrictamente políticos, mediados por la identidad colectiva o la pertenencia a grupos, de los que resultaron conflictos del tipo “nosotros” contra “ellos”.

Como he intentado demostrar a través de algunas investigaciones, pienso que este es un marco teórico adecuado para comprender, con los ajustes del caso, lo que está pasando en Venezuela desde el año 1993 y, en consecuencia, la significación que tuvo en nuestra historia política el 11 de abril de 2002.

Los realineamientos políticos en la Venezuela de los '90

Desde el año 1993, la literatura politológica venezolana habla de la quiebra de las lealtades partidistas de AD y COPEI -los dos principales partidos del sistema que se inaugura en 1958 y culmina en 1998- y de un cambio de las preferencias electorales. Este cambio estuvo caracterizado por una brutal disminución del caudal de votos que históricamente habían obtenido, en suma, estos dos partidos, en favor de un acelerado crecimiento de la votación de los partidos de izquierda, entre los que destacó, en esa fecha, La Causa R.

Lo demás ya es historia conocida. El segundo gobierno del Presidente Rafael Caldera, con uno de los peores desempeños socioeconómicos de toda la historia del siglo XX venezolano, facilitó la caída del sistema político instaurado desde 1958, entre otras cosas mediante el sobreseimiento de la causa que involucraba al entonces Teniente-Coronel Hugo Chávez Frías, por haber participado en el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992. Esto le permitió a Hugo Chávez recorrer el país y ejercer una creciente influencia en la opinión pública, especialmente desde 1997, cuando se inicia la campaña electoral presidencial y se configura una amplia coalición de movimientos y partidos políticos de izquierda y centro-izquierda.

Las primeras crisis del gobierno de Chávez

El mandato del Presidente Chávez se inicia, en 1999, con una de las más altas votaciones de la historia política venezolana (56.6% de votos válidos frente a 39.9% que obtuvo Henrique Salas-Römer, su principal contendor) y uno de los índices de popularidad más altos –según algunas encuestadoras, del 75%, según otras, por encima del 80%. Esta “luna de miel” fue hábilmente aprovechada por el Presidente para ganar todas las consultas electorales realizadas durante los

años 1999 y 2000, incluyendo el referendo consultivo en el que se aprobó la Constitución de 1999 y las elecciones de reelección de cargos públicos efectuada durante el año 2000 (mejor conocida como las “Mega-elecciones”), en donde el Presidente fue reelecto con el 59.76% del total de votos válidos. El balance de estas consultas es que, para el año 2000, el porcentaje de votos a favor y en contra del gobierno rondaban una distribución del 60%-40% respectivamente.

La crisis de abril de 2002

Pero ya en septiembre de 2001 –a escasos 2 años y 7 meses de iniciado el mandato-, el gobierno empieza a enfrentar una pérdida relevante de aliados políticos y apoyos en la opinión pública. Como se ha señalado en otro lugar, quizás el rasgo más sintomático de esta etapa fue el intento gubernamental de penetrar y controlar sectores e instituciones de la sociedad tales como los sindicatos, los gremios y asociaciones empresariales, la Iglesia y hasta los medios de comunicación social, intento que estuvo acompañado por un discurso agresivo y confrontacional por parte del Presidente de la República, que descalificaba a las dirigencias de las instituciones señaladas y hasta invitaba a algunos de sus aliados a irse de la coalición si no estaban de acuerdo con sus políticas. Fue la etapa en que el discurso presidencial empezó a insistir, cada vez más abiertamente, acerca del carácter “revolucionario” del gobierno.

Esta radicalización debe haber ejercido una notable influencia en la caída del nivel de aprobación de la gestión presidencial que, de acuerdo a estudios de opinión pública realizados por la firma Datanalisis, tras haberse situado en 55.8% en julio de 2001, pasó al 35.5% en diciembre de ese año -una caída de poco más de 20 puntos porcentuales en apenas cinco meses. Incluso, de acuerdo a esta firma, en febrero de 2002 el nivel de aprobación de la gestión presidencial llegó a situarse en 34.4%.

Los 49 decretos-leyes promulgados por el Ejecutivo en diciembre de 2001, como resultado de una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional que le cedía al Ejecutivo Nacional facultades legislativas, fueron el detonante del clima de conflictividad que había venido promoviéndose desde septiembre de 2001. Y ello porque los 49 decretos-leyes promulgados por el Ejecutivo afectaban tantos intereses simultáneamente que era previsible una reacción por parte de sectores de la sociedad. De allí surgió, entonces, la iniciativa de una paralización nacional propuesta para diciembre de 2001, respaldada por FEDECÁMARAS, la principal asociación de cámaras empresariales de Venezuela, y la CTV, la principal central sindical.

Además del carácter inconsulto de muchas de las leyes, ocurrió que las sugerencias públicamente hechas por estas dos instituciones -así como por otros sectores y organizaciones de la sociedad civil- para modificar el contenido de las mismas, no fueron tomadas en consideración por el gobierno. A esto siguió el nombramiento de Gastón Parra Luzardo como presidente de PDVSA –un conocido izquierdista sin trayectoria en la petrolera estatal-, lo que irritó a los trabajadores de la petrolera por su creencia en la necesidad de promover ascensos entre conocedores de la industria petrolera venezolana.

El conflicto adquirió una mayor intensidad con los despidos públicos de gerentes de alto nivel de PDVSA, hechos por el primer mandatario en su programa televisivo dominical “Aló, Presidente”. Este fue el origen del paro general, propuesto por la CTV, para el 9 de abril de 2002, que desembocó en la marcha de cientos de miles de manifestantes del 11 de abril, que intentó llegar al Palacio de Miraflores –el palacio de gobierno- con el objeto de exigir la renuncia del presidente Chávez. Se estima que dicha manifestación reunió no menos de 800.000 personas, que llenaron la principal autopista que conduce hacia el centro de Caracas.

Antes de que la concentración de opositores al gobierno partiera hacia el Palacio de Miraflores, diversos voceros de la coalición gubernamental habían estado haciendo llamados públicos a los partidarios del oficialismo, por televisión y radio, para concentrarse en los alrededores del Palacio. Incluso, existen evidencias que demuestran que la concentración de partidarios del gobierno en las cercanías del Palacio venía produciéndose días antes del 11 de abril.

El resultado fue un choque violento entre partidarios del oficialismo y la oposición, que dejó un saldo de diecinueve muertos y más de cien heridos de bala, y que contó incluso con la participación de efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana. De hecho, existen varios videos, que han sido transmitidos por los diferentes canales de la televisión venezolana, en los que se observa a partidarios del oficialismo, así como a efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana, disparando con armas de fuego.

Esto desembocó en la solicitud de renuncia que le formuló parte del Alto Mando Militar y otros oficiales militares al presidente Chávez, anunciada por el inspector en jefe de la Fuerza Armada Nacional, general Lucas Rincón Romero, en horas de la madrugada del 12 de abril por televisión.

No obstante, el intento de captura del poder por parte de una élite, así como el precario apoyo que logró el auto-juramentado gobierno presidido por el empresario Pedro Carmona, facilitaron la vuelta de Hugo Chávez al poder. Un gobierno caído en apenas cuarenta y ocho horas es una clara señal de que confrontó severos problemas de legalidad y legitimidad.

El 11 y el 12 de abril de 2002: dos fenómenos distintos

Desde los sucesos de abril de 2002, algunos dirigentes de oposición han sostenido que el 11 de abril hubo un “vacío de poder” que inevitablemente derivó en su toma por parte de una élite que tenía a la cabeza al empresario Pedro Carmona, mientras que voceros del oficialismo sostienen enfáticamente que hubo un golpe de estado cuya planificación antecede a los sucesos del 11 de abril. A este respecto permítaseme señalar que quien escribe está en desacuerdo con ambas interpretaciones de la realidad, porque ambas ocultan una parte de la “pintura” que compone globalmente lo que ocurrió en esa fecha. Pienso que entre el 9 y el 11 de abril estalló un proceso de auténtica *desobediencia civil* que muy poco tiene que ver con el *golpe de estado* que se inició desde la madrugada del 12 de abril.

Es cierto que fue un *golpe de estado* muy peculiar, promovido por el intento del Presidente Chávez de activar el Plan Ávila –un plan de contingencia existente en la Fuerza Armada Nacional, que implica la utilización de su poder de fuego si es necesario- contra la manifestación que se aproximaría luego al Palacio de Miraflores. Este elemento, que no concitó apoyo en el seno de la Fuerza Armada, es clave para explicar la salida del poder del Presidente Chávez por cuarenta y ocho horas, como también lo es el hecho de que el General en Jefe Lucas Rincón Romero anunciara públicamente la renuncia del Presidente de la República, y más aún, que no se supiera del paradero del entonces Vicepresidente Diosdado Cabello, a quien le correspondía, constitucionalmente, suplir la falta del Presidente. Pero de allí a concluir que el proceso de *captura del poder* que se produjo desde la madrugada del 12 de abril fue legítimo o más aún constitucional, hay una notable diferencia. Pienso que no puede llamarse de un modo distinto que como *golpe de estado* a un proceso en el que se produce una *transferencia de poder* por medios distintos a los constitucionalmente establecidos.

Pero lo que sostienen algunos voceros del oficialismo constituye, igualmente, una distorsión de la realidad. Señalar que una élite procuró conscientemente una confrontación violenta con partidarios del oficialismo y que, además, tenía el control de los cientos de miles de manifestantes que asistieron al centro de Caracas para exigir la renuncia del Presidente Chávez es, al menos, una exageración. Si aceptamos esta versión, debemos convalidar simultáneamente las conclusiones de los primeros estudios sobre psicología de las multitudes de acuerdo a los cuales la masa, cuando es excitada por algunos líderes, actúa inconscientemente, guiada por sus pulsiones naturales e instintivas.

Para empezar, es necesario decir que si el gobierno tenía en mente evitar una confrontación armada ha debido asegurarse de que tanto los efectivos de la Guardia Nacional como los partidarios del gobierno concentrados en los alrededores de Miraflores no tuvieran armas de fuego. Luego, muchos de los asistentes a la congregación de PDVSA en Chuao asistieron ya con la idea de que había que provocar un desenlace, lo cual sugiere que la visión según la cual

esta era una idea exclusiva de una élite es cuando menos limitada. Y para finalizar, muchos de los asistentes a dicha manifestación fueron motivados por la necesidad de protestar la actuación del Presidente Chávez desde finales de 2001, especialmente por lo que estimaron como un comportamiento arbitrario del primer mandatario. Naturalmente, sólo muy pocos podrían haber pensado que la protesta tendría un saldo de 19 muertos y más de 100 heridos, pues de lo contrario se habrían retirado antes, como en efecto lo hicieron muchos tan pronto escucharon los primeros disparos.

De este modo llegamos a la conclusión de que si bien es cierto que una élite estimuló finalmente a los manifestantes a asistir a Miraflores, también lo es que ello formaba parte del clima de opinión que se había creado en el país meses atrás.

Si estos argumentos no fueran suficientes, bastaría un examen de las evidencias que se tienen a mano. La nutrida manifestación que se concentró en la sede de Chuao de PDVSA y que luego marchó hacia el Palacio de Miraflores es una primera pista. Si no hubiera existido un clima de protesta contra el gobierno y el Presidente Chávez entre un importante segmento de la población, difícilmente se habría producido semejante manifestación que, se insiste, se estima en al menos 800.000 personas. Pero más aún, hay evidencias previas de la existencia de este clima de opinión. Por ejemplo, en febrero de 2002 la firma Datanalisis publicó una estadística particularmente reveladora: el 31% de la muestra del estudio, que se efectuó en los principales centros poblados urbanos del país, señalaba estar dispuesta a asistir a una manifestación en contra del Presidente.

El 11 de abril de 2002: un hito del cleavage venezolano

Son, sin embargo, las versiones contrapuestas de las que hemos hablado *supra*, las que ejercen mayor influencia en la configuración de las opiniones políticas de los venezolanos, y las que permiten, entre otras cosas, mantener la *división política* existente, que cada vez más adquiere contenidos socioeconómicos (de clase) e ideológicos. Dicho de otro modo, los sucesos del 11 de abril alimentan y refuerzan el *cleavage* venezolano.

La batalla de opinión pública y comunicación política que se desarrolla en Venezuela desde esa fecha entre gobierno y oposición impide interpretar con la mayor objetividad posible los sucesos ocurridos. Primero porque, como dirían Rokkan y Lipset, se trata de un evento que polariza a la sociedad entre “unos” y “otros”, y que ejerce una gran influencia sobre las principales percepciones de los ciudadanos en torno a lo público y en torno a las fuerzas en choque; segundo, porque toca actitudes y valores pre-existentes, e incluso, podría decirse que hasta prefigura unos nuevos, cuyo impacto final son los alineamientos políticos y partidistas, y las votaciones en las consultas electorales que se han sucedido.

Si no existiera en Venezuela un grueso segmento de la opinión pública que se define como “de ninguno de los dos bandos” –los técnicamente denominados “No alineados”-, que a excepción de los períodos electorales ronda el 40% de la población, el 11 de abril de 2002 hubiera sido el inicio de una “guerra civil” en Venezuela.

Lo lamentable de esta experiencia es que, a 5 años, todavía hay muchas incógnitas sin resolver. Por ello, la pregunta clave es: ¿será que, además de las percepciones pre-existentes, las dudas que aún persisten y el silencio de las instituciones públicas sobre los sucesos de abril de 2002 convienen al mantenimiento del *cleavage* venezolano?

John Magdaleno

John Magdaleno es Politólogo egresado de la UCV, Magister en Ciencia Política por la USB y Especialista en Análisis de Datos en Ciencias Sociales por la UCV. Se desempeñó como *Consultor Senior* de Datanalisis, fue Director de la Encuesta Nacional ÓMNIBUS de Datanalisis y redactor de las publicaciones Escenarios Datanalisis. Asimismo, fue Consultor Externo de Venevisión y Director de Comunicaciones de la campaña electoral presidencial de Teodoro

Petkoff. En la actualidad se desempeña como Profesor de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, Profesor Invitado del IESA en la materia “Análisis de entorno y Construcción de Escenarios”, Consultor en Asuntos Públicos y Estrategias, y Director del Capítulo Venezolano del Club de Roma.

Direcciones de e-mail: john.magdaleno@cantv.net; john.magdaleno@gmail.com